

Fundación alerta sobredemanda en centros para menores

Solo en diciembre de 2025 se atendieron a más de tres mil niños derivados desde los tribunales.

Germán Pozo Sanhueza
cronica@estrellaiquique.cl

La región de Tarapacá registra una elevada incidencia de vulneraciones de derechos que afectan a niños y adolescentes. Según el Servicio de Protección Especializada, 3.315 menores fueron atendidos durante diciembre de 2025 en los nueve Programas de Reparación de Maltrato (PRM) presentes en la zona.

En ese contexto, la Fundación Ciudad del Niño, desde noviembre de 2025, asumió la gestión de cinco de estos programas que operan en igual número de centros en Iquique, sumando 500 cupos para menores derivados por los Tribunales de Familia.

Cada programa dispone de 100 plazas, aunque la demanda ya supera esa capacidad. En enero de 2026, los cinco PRM registraron 726 atenciones. Del total de ingresos, un 57,6% correspondió a casos de violencia intrafamiliar y un 24,2% a delitos contra la indemnidad sexual.

El presidente de la institución, José Pedro Silva, señaló que la situación local refleja una presión sosteni-



FUNDACIÓN CIUDAD DEL NIÑO TIENE CINCO CENTROS A CARGO EN LA REGIÓN.

da sobre la red especializada. "Evidencia una demanda particularmente alta de niños y adolescentes que requieren protección", afirmó. A la fecha, precisó, han superado los cupos proyectados, generando sobrecupos y una lista de espera en constante crecimiento.

MIGRACIÓN

La realidad regional tam-

bién presenta un componente migratorio relevante. Un 27,3% de los niños atendidos son extranjeros, principalmente bolivianos, proporción que supera ampliamente el promedio nacional de la fundación, cercano al 6%. Dentro de ese grupo en Tarapacá, un 33,3% ingresó por delitos contra la indemnidad sexual, en contraste

con el 20,8% de menores chilenos con esa causa en la zona.

Silva advirtió que muchos de estos niños "no cuentan con documentación o se encuentran en situación migratoria irregular", lo que complejiza las intervenciones y exige gestiones adicionales para garantizar el acceso a derechos básicos.

Respecto del trabajo que desarrollan los programas, el presidente de la fundación explicó que la intervención es integral y se ejecuta mediante equipos interdisciplinarios. "Contamos con psicólogos, trabajadores sociales, abogados y otros profesionales especializados que trabajan directamente con los niños y sus familias", detalló. Agregó que el abordaje contempla terapia individual y familiar, apoyo psicosocial, orientación jurídica y coordinación con redes comunitarias para asegurar la restitución de derechos y prevenir nuevas vulneraciones.

Asimismo, enfatizó que el acompañamiento no se limita al ámbito terapéutico. "También vinculamos a las familias con servicios de educación, salud y beneficios sociales, porque estabilizar el entorno es clave para que la reparación sea efectiva (...). La región presenta un escenario complejo, con altos niveles de violencia intrafamiliar, desintegración familiar, explotación laboral infantil y abusos sexuales agravados. El desafío en la zona es enorme", concluyó.